

Roco Reyes, Orlando Rodrigo
Juez de Garantía Coquimbo
Amparo art. 21 Constitución Política
Rol 146-2022

La Serena, siete de mayo de dos mil veintidós

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el 03 de mayo pasado, el abogado MARCO CACERES MENDEZ, en representación de don ORLANDO RODRIGO ROCO REYES, imputado en causa RUC 1900128702-0 RIT 643-2019, del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

La acción se dirige en contra del señor Juez de Garantía de la ciudad de Coquimbo, don IVAN VIAL AGUILAR, quien en audiencia de revisión de acuerdo reparatorio, celebrada el 28 de abril pasado, decretó orden de detención contra su representado, para ser conducido lo más pronto posible a la presencia judicial por intermedio de la coacción, solicitando se deje sin efecto la resolución vertida en la citada audiencia y disponga la inmediata contraorden de detención.

Relata que el 4 de febrero de 2019, el Ministerio Público, en audiencia de control de la detención, presentó requerimiento verbal en procedimiento simplificado, por un delito de daños simples, del artículo 487 del Código Penal.

Luego, el 22 de febrero de 2019, se celebra audiencia de procedimiento simplificado, en donde se aprobó acuerdo reparatorio, bajo la condición de que: "el imputado Orlando Rodrigo Roco Reyes debe pagar a la víctima don Arturo López Gómez, la suma de \$200.000 en 4 cuotas de \$50.000 pesos a contar del día 20 de marzo del presente año en la cuenta Rut de la víctima N°5.370.612-6." (sic)

Agrega que el pasado 29 de marzo, es el propio tribunal, actuando de oficio, quien cita a una audiencia de "revisión de acuerdo reparatorio", la que tuvo lugar con fecha 13 de



abril pasado, reprogramándose a su vez para el 28 de abril, audiencia a la que no comparece su representado, ni la víctima, y a pesar de los argumentos de la defensa, se decidió despachar orden de detención en su contra.

Alega que la decisión es ilegal y arbitraria pues no existe norma alguna que permita al sentenciador de garantía actuar de oficio, y se ordene citar a una audiencia de revisión de acuerdo reparatorio sin petición previa de la víctima, ni menos aún, obtener la comparecencia forzada del obligado al pago.

Añade que el delito sobre que versa la causa no solo posee una baja penalidad, sino que además contempla pena alternativa de multa, por lo que no resulta proporcional mantenerlo sujeto a medida cautelar alguna.

Finaliza, después de citas legales y jurisprudenciales, solicitando que el recurso debe ser acogido dejando sin efecto la medida cautelar y se dicte la contraorden respectiva.

SEGUNDO: Que, a folio 5, evacua informe don IVÁN VIAL AGUILAR, juez (S) del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

Señala que efectivamente, tal como expone la parte recurrente, con fecha 28 de abril de 2022 se realizó en el Juzgado de Garantía de Coquimbo audiencia de verificación de acuerdo reparatorio, en los autos RIT 643-2019, audiencia en la que, previa petición del Ministerio Público, se accedió a despachar orden de detención respecto del imputado Orlando Rodrigo Roco Reyes, atendida su incomparecencia injustificada, encontrándose válidamente notificado para comparecer a la misma.

Como antecedente, señala que en dicha causa el imputado fue requerido por un delito de daños simples del artículo 487 del Código Penal, y que en audiencia de fecha 22 de febrero



de 2019 se arribó a un acuerdo reparatorio, consistente en el pago de la suma de \$200.000.- a la víctima, en cuatro cuotas de \$50.000.- cada una, a contar del 20 de marzo de 2019, en la cuenta rut aportada por la víctima.

De igual forma, por resolución de fecha 29 de marzo de 2022, en consideración al tiempo transcurrido, el tribunal dispuso citar a audiencia para revisar el cumplimiento del acuerdo reparatorio, disponiendo la citación del imputado bajo apercibimiento del artículo 33 del Código Procesal Penal. Dicha resolución, no fue impugnada ni cuestionada en momento alguno por la defensa.

De esta manera, se realizó una primera audiencia de verificación de acuerdo reparatorio el día 13 de abril de 2022, oportunidad en que si bien el imputado resultó con notificación fallida, la defensa tampoco planteó cuestionamiento ni incidencia alguna en cuanto a la procedencia de la audiencia. En dicha ocasión, y a petición del Ministerio Público, se hizo efectivo el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal respecto del imputado, ordenando que las sucesivas notificaciones se realizaran a través del estado diario.

Agrega que el 28 de abril de 2022 se llevó a cabo nueva audiencia de verificación de acuerdo reparatorio, a la cual el imputado no compareció, encontrándose esta vez válidamente notificado. Luego, el Ministerio Público solicitó que se despachara orden de detención en su contra, solicitud a la que, previo traslado a la defensa, el tribunal accedió, en consideración a que el imputado se encontraba válidamente notificado para comparecer y la defensa manifestó no contar con antecedentes para justificar la inasistencia del imputado. Asimismo, tampoco la defensa hizo cuestionamiento



alguno en dicha instancia en cuanto a la procedencia de la audiencia.

De esa manera, la resolución de fecha 28 de abril de 2022, que accedió a decretar la orden de detención solicitada por el Ministerio Público, y que por esta vía cuestiona el recurrente, a juicio del informante se encuentra debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho. En efecto, el imputado se encontraba válidamente notificado para comparecer a dicha audiencia, sin haber cumplido con dicha obligación, y sin tampoco haberse justificado la inasistencia por su defensa, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, la petición del Ministerio Público resultaba ajustada a derecho.

Por otra parte, indica que el acto que se busca dejar sin efecto por el recurrente, en caso alguno ha sido decretado de oficio por el tribunal, sino que fue solicitado por el Ministerio Público ante la incomparecencia del imputado, y se accedió al mismo previo traslado a la defensa.

Agrega que los cuestionamientos que hace el recurrente más bien apuntan a la procedencia de la resolución de fecha 29 de marzo de 2022, por la cual el tribunal citó a los intervinientes a audiencia de revisión de cumplimiento del acuerdo reparatorio. Sin embargo, dicha resolución no fue expedida por el informante y, además dicha resolución tampoco fue objeto de recurso o cuestionamiento alguno por parte de la defensa a lo largo de la tramitación.

TERCERO: Que la acción de amparo prevista en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto proteger a las personas que ilegalmente sufren cualquier privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y/o a la seguridad individual, motivo por el cual, y considerando que en definitiva el acto



denunciado concierne a aquel en virtud del cual se negó al amparado el beneficio de libertad condicional, corresponde entonces determinar si, en la especie, la Comisión de Libertad Condicional, al decidir como lo hizo, incurrió efectivamente de modo ilegítimo en alguna vulneración a los derechos fundamentales precedentemente citados.

CUARTO: Que, del tenor de lo informado por la recurrida, la decisión impugnada, estaría justificada, previo el debate de los intervinientes en audiencia de 28 de abril pasado, al estimarse que, frente a la incomparecencia del imputado a una audiencia a la que se encontraba debidamente citado bajo apercibimiento de despachar en su contra orden de detención, se cumplía con la hipótesis del artículo 33 del Código Procesal Penal

QUINTO: Que, lo cuestionado por la defensa dice relación con la ilegalidad al disponer la detención de su representado, pues por un lado el tribunal actuó de oficio al disponer una audiencia de revisión y luego, no concurren los presupuestos de la medida cautelar, la que además resulta desproporcionada atendido el mérito de los antecedentes especialmente la entidad del delito de daños.

SEXTO: Que, en cuanto a la audiencia de revisión, útil resulta tener en vista lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal, que dispone, en cuanto a los efectos penales del acuerdo reparatorio, que *"Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado."* Lo dicho refleja dos cosas, primero que ocurrida esta salida alternativa, deben cumplirse las



obligaciones contraídas en él, y segundo, que verificado el cumplimiento el juez "debe" sobreseer, para lo cual parece lógico que el juez deba indagar sobre la existencia del cumplimiento, lo que supone, en materias penales reformadas la realización de una audiencia, lo que en la especie ocurrió, y no fue objeto de reproche por los intervinientes.

Lo anterior descarta ilegalidad y arbitrariedad en esa decisión, y lo señalado por la defensa en cuanto a lo previsto en el inciso segundo del citado artículo, no modifica lo razonado, pues solo establece la posibilidad para la víctima de pedir el cumplimiento de los acuerdos reparatorias, y no impide, a juicio de estos sentenciadores, que sea el tribunal, quien pueda decretarla de oficio, pues de la historia del establecimiento de este inciso segundo, se aprecia que su intención era establecer para la víctima la posibilidad (facultad) de pedir el cumplimiento y no vedar las facultades del juez de garantía.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la procedencia de la detención, el artículo 33 del precitado cuerpo legal, regula la citación judicial, y expresamente prevé en su inciso tercero que *"El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva"*. Lo anterior debe relacionarse con el inciso segundo del artículo 269 que establece *"Si en la audiencia se ventilare la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, o cualquier otra actuación en que la ley exigiere expresamente la participación del imputado, su presencia constituirá un requisito de validez de aquella."*

En la especie, el imputado estaba legalmente citado y apercibido, esa resolución está ejecutoriada, y por tanto la



orden decretada, que cuestiona la defensa por esta vía, se ajusta a las circunstancias fácticas y normativas de los citados preceptos, existiendo, como quedó demostrado, el debido debate entre los litigantes antes de decretar la detención del amparado.

OCTAVO: Que, conforme a lo dicho, al emanar la resolución reprochada en el recurso de amparo, de un tribunal competente, quien ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, mediante una resolución que se encuentra debidamente motivada, y en un supuesto contemplado por la ley para ello, es procedente desechar el presente arbitrio, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Amparo, **SE RECHAZA** el recurso de amparo deducido a favor de ORLANDO RODRIGO ROCO REYES.

Acordada con el voto en contra del Ministro (s) señor Jorquera quien estuvo por acoger el recurso y disponer que se deje sin efecto la orden de detención estimando que por un lado, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 242 del Código Procesal Penal, corresponde a la víctima, no solo el impulso procesal para discutir el cumplimiento de un acuerdo reparatorio, sino que para optar a que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio y se oficie al Ministerio Público a fin de reiniciar la investigación penal, de donde aparece que el tribunal no se encontraba facultado para fijar de oficio una audiencia de verificación del cumplimiento del acuerdo reparatorio aprobado en la especie; y, en segundo lugar, porque el tribunal, al haber fijado una audiencia respecto de la cual no estaba facultado para actuar de oficio, no se encontraba legalmente facultado para hacer



uso de las facultades sancionatorias del artículo 33 del código procesal citado, ante la incomparecencia del imputado. Más aún, cuando en el evento que compareciera, y confirmare el incumplimiento de la obligaciones, no podría tomar resolución alguna, en relación al acuerdo reparatorio. Dada las facultades que tiene la víctima al respecto, lo que evidencia la falta de proporcionalidad, de la detención decretada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°146-2022.- Amparo.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros (as) Marta Silvia Maldonado N., Christian Michael Le-Cerf R. y Ministro Suplente Carlos Lorenzo Jorquera P. La Serena, siete de mayo de dos mil veintidós.

En La Serena, a siete de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>